

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Lorenzo S. Domínguez. — Norberto R. Nicotra. — Roxana I. Latorre. — Juan C. Olma.

—A las comisiones de Transportes, de Obras Públicas y de Comercio.

47

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

CAPÍTULO I

De los acuerdos y prácticas prohibidas

Artículo 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas.

Art. 2º — Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que con domicilio legal en el extranjero realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.

A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

Art. 3º — Quedan prohibidas en particular las prácticas anticompetitivas en sí mismas, consistentes en acuerdos, convenios, decisiones de asociaciones o prácticas concertadas, en todos los casos entre competidores, cuyo objeto o efecto sea:

- a) La fijación, concertación o manipulación en forma directa o indirecta del precio de venta, o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en el mercado, así como el intercambio de información con el mismo objeto o efecto;
- b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comparar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;

- c) El reparto horizontal de zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento, excepto en los casos en los cuales tales conductas se originen en operaciones derivadas de franquicias, licencias o distribución, cuyas prácticas no persigan objetivos anticompetitivos;
- d) La concertación o coordinación de posturas en las licitaciones o concursos;
- e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
- f) Concertar, impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste.

Las prácticas prohibidas establecidas en el presente artículo son nulas de nulidad absoluta.

CAPÍTULO II

Del abuso de posición dominante

Art. 4º — A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mismo, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado, en perjuicio de éstos.

Art. 5º — A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:

- a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
- b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
- c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

CAPÍTULO III

De las autorizaciones

Art. 6º — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá autorizar acuerdos o prácticas concertadas, sólo cuando contribuyan a mejorar el interés económico general y siempre que se traduzca en evidentes ventajas para los usuarios y consumidores, y no se consienta a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado involucrado.

En estos supuestos el tribunal deberá convocar a audiencia pública, cuyo procedimiento será reglado por el respectivo decreto reglamentario.

Art. 7º — La autorización concedida deberá determinar con precisión las condiciones a las que ha sido sometida y el plazo por el que se la concede, debiendo en tal caso fijar el tribunal la fecha a partir de la cual tendrá efecto.

En caso de verificar el tribunal que han cambiado las circunstancias que motivaron el otorgamiento de una autorización, podrá revocarla o modificar las condiciones fijadas inicialmente. Asimismo la autorización podrá ser revocada si los beneficiarios incumplieran las condiciones establecidas o si el tribunal comprobara que fueron otorgadas en base a datos relevantes aportados en forma incompleta o inexacta.

CAPÍTULO IV

De las concentraciones y fusiones

Art. 8º — Están prohibidas las operaciones de concentración económica que tengan como consecuencia la adquisición o consolidación de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas a través de la realización de los siguientes actos:

- a) La fusión entre empresas;
- b) La transferencia del fondo de comercio;
- c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de o la influencia sustancial sobre la misma;
- d) La celebración de contratos de colaboración empresarial o constitución de cualquier tipo de sociedad temporaria de empresas;
- e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Art. 9º — Los actos indicados en el artículo anterior que cumplan con las pautas que periódicamente fije el Poder Ejecutivo a través del decreto reglamentario de la presente ley, deberán ser notificados al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia con por lo menos cuarenta y cinco días de anticipación a su realización. El tribunal dará a publicidad por un día estos actos a través del Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. El tribunal podrá, dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación, decidir que el acto quede sujeto a autorización previa.

Art. 10. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al tribunal y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser provistos.

Art. 11. — La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas.

Art. 12. — En todos los casos previstos en este capítulo el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá, de considerarlo conveniente, llamar a audiencia pública. A tal fin el tribunal pondrá a disposición de quienes deseen participar en dichas audiencias los antecedentes del acto sometido a autorización, excepto la documentación que haya sido acompañada por las partes con la indicación de confidencial, en cuyo caso el tribunal por decisión fundada resolverá al respecto.

Art. 13. — En todos los casos sometidos a autorización, el tribunal deberá decidir dentro de los ciento ochenta (180) días de presentada la solicitud y por resolución fundada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 40 de la presente ley:

- a) Autorizar la operación;
- b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo tribunal establezca;
- c) Denegar la autorización.

Art. 14. — Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa.

Art. 15. — Cuando la concentración económica involucre a empresas o personas cuya actividad económica esté reglada por el Estado nacional a través de un organismo de control o regulador, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previo al dictado de su resolución, deberá requerir a dicho ente estatal un informe y opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado respectivo. La opinión del ente de control o regulador no será vinculante para el tribunal, aunque deberá ser debidamente valorada en los fundamentos de su resolución.

CAPÍTULO V

Autoridad de aplicación

Art. 16. — Créase como órgano autónomo en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su sede en la Capital Federal pero podrá actuar, constituir o sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegaciones fijas o móviles.

Art. 17.—El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia estará integrado por siete (7) miembros, tres (3) de los cuales serán abogados y otros tres (3) profesionales en ciencias económicas, el séptimo miembro podrá ser profesional en cualquiera de dichas ciencias. Todos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.

Art. 18.—Los miembros del tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario de Industria, Comercio y Minería, el secretario de Obras y Servicios Públicos, ambos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación.

Art. 19.—Los miembros del tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación de los mismos se hará por mitades cada tres años y podrán ser reelegidos. Sólo podrán ser removidos previa decisión de un jurado integrado por los funcionarios mencionados en el artículo anterior.

La causa por remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional o del presidente del tribunal y sólo por decisión del jurado si la causa tuviera cualquier otro origen.

El jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de defensa y debido trámite de la causa.

Art. 20.—Son causas de remoción de los miembros del tribunal:

- a) Mal desempeño en sus funciones;
- b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
- c) Incapacidad sobreviniente;
- d) Condena por delito doloso;
- e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
- f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 21.—Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel integrante del tribunal sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso.

Art. 22.—Créase en el ámbito del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el Registro Nacional de Defensa de la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones de concentración económica previstas en el capítulo IV y las resoluciones definitivas por el tribunal. El registro será público a los fines de estas últimas.

Art. 23.—Son funciones y facultades del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:

- a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes para detectar

posibles distorsiones en la competencia. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales o municipales la información, documentación o colaboración que juzgue necesarios;

- b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados testigos y peritos, recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
- c) Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes a la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
- d) Solicitar al juez en lo penal económico de la Capital Federal o al juez federal competente en el interior en cualquier estado del proceso como medida preventiva, que las personas físicas imputadas ya sea directa o por su participación o cooperación en los casos de personas de existencia ideal, no puedan ausentarse del país sin previa autorización. El juez deberá resolver el pedido del tribunal en el plazo de veinticuatro (24) horas;
- e) Resolver las cuestiones sometidas a su competencia;
- f) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley;
- g) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
- h) Cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos vinculantes;
- i) Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
- j) Actuar con las dependencias competentes en la negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia;
- k) Elaborar su reglamento interno;
- l) Elaborar su presupuesto anual;
- ll) Organizar el Registro Nacional de la Competencia creado por esta ley;
- m) Promover e instar acciones ante la Justicia, para lo cual designará representante legal a tal efecto;
- n) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
- ñ) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial, la que será solicitada por el tribunal al juez competente, quien deberá resolver en el plazo de 24 horas;

- o) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de 24 horas;
- p) Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias en las provincias;
- q) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución.

CAPÍTULO VI

Del presupuesto

Art. 24. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia formulará anualmente el proyecto de presupuesto para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional.

El tribunal establecerá la fijación de tasas que deberán abonar los interesados por las actuaciones que inician ante el mismo. Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios del organismo.

CAPÍTULO VII

Del procedimiento

Art. 25. — El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Art. 26. — La denuncia deberá contener el detalle de los hechos que se imputan y su fundamentación. El tribunal podrá desestimar por resolución fundada la denuncia cuando de su sola exposición resultare que los hechos no encuadran en las previsiones de la presente ley.

Art. 27. — Si el tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá traslado por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que la instrucción se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que los motivaron.

Art. 28. — Evacuada la vista el tribunal resolverá sobre la procedencia de la instrucción sumarial.

Art. 29. — Si el tribunal considera satisfactorias las explicaciones o si concluida la instrucción no hubiere mérito suficiente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.

Art. 30. — Concluida la instrucción el tribunal notificará a los presuntos infractores para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente.

Art. 31. — Las decisiones del tribunal en materia de prueba son irrecurribles.

Art. 32. — Concluido el período de prueba, que será de noventa (90) días o transcurrido el plazo para realizarlo, las partes podrán alegar en el plazo de tres (3) días sobre el mérito de la misma. El tribunal dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días.

La resolución del tribunal pone fin a la vía administrativa.

Art. 33. — El tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la obtención de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una lesión irreparable al régimen de competencia, podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 46 y 47.

En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevivientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.

Art. 34. — Hasta el dictado de la resolución del artículo 32 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o la modificación de aspectos relacionados con ello.

El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a los efectos de producir la suspensión del procedimiento.

Transcurridos tres (3) años de cumplimiento del compromiso del presente artículo, se archivarán las actuaciones.

Art. 35. — El tribunal podrá de oficio o a instancia de parte aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.

Art. 36. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia decidirá la convocatoria a audiencias cuando lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.

Art. 37. — La decisión del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia respecto de la realización de la audiencia deberá contener, según corresponda:

- a) Identificación de la investigación en curso;
- b) Carácter de la audiencia;
- c) Objetivo;
- d) Fecha, hora y lugar de realización;
- e) Requisitos para la asistencia y participación.

Art. 38. — Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no inferior a quince (15) días.

Art. 39. — La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial con una antelación mínima de diez (10) días. Dicha publicación deberá contener, al menos, la información prevista en el artículo 37.

Art. 40. — El tribunal podrá admitir como parte coadyuvante en los procedimientos que se sustancien ante el mismo a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores y asociaciones em-

presarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda otra persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos investigados. La decisión del tribunal será irrecurrible.

Art. 41. — El tribunal podrá requerir dictámenes sobre los hechos investigados a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación.

Art. 42. — Las resoluciones que establecen sanciones del tribunal, una vez notificadas a los interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial, y cuando aquél lo estime necesario, en los diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado.

CAPÍTULO VIII

De las sanciones

Art. 43. — Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) El cese de los actos o conductos previstos en los capítulos I y II y, en su caso, la remoción de sus efectos;
- b) Los que realicen los actos prohibidos en los capítulos I, II y IV serán sancionados con una multa de un mil pesos (\$ 1.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000), que se graduará en base al beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida, o al valor de los activos involucrados de todas dichas personas al momento en que se cometió la violación, o de los ingresos brutos de todas aquéllas. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán;
- c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, el tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;
- d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9º, 33 y 34 serán pasibles de una multa de hasta cinco mil pesos (\$ 5.000) diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudiera corresponder.

Art. 44. — Las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda

o en beneficio de la persona de existencia ideal, y aun cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.

Art. 45. — Cuando las infracciones previstas en esta ley fueran cometidas por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales de dicha persona de existencia ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.

En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas en el apartado anterior.

Art. 46. — El tribunal en la imposición de multas deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica.

Art. 47. — Los que obstruyan o dificulten la investigación o no cumplan los requerimientos del tribunal podrán ser sancionados con multas de hasta quinientos pesos (\$ 500) diarios. Cuando a juicio del tribunal se haya cometido la infracción mencionada, se dará vista de la imputación al presunto responsable, quien deberá efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de cinco días.

Art. 48. — Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia.

CAPÍTULO IX

De las apelaciones

Art. 49. — Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el tribunal que ordenen:

- a) La aplicación de las sanciones de multa;
- b) El cese o la abstención de una conducta;
- c) La oposición o condicionamiento respecto a los actos previstos en el capítulo IV;
- d) La desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia;
- e) La resolución que dispone el sobreseimiento del denunciado.

Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán con efecto suspensivo, y las de los incisos b), c), d) y e) se concederán con efecto devolutivo.

Art. 50. — El recurso de apelación deberá deducirse ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia dentro de los cinco (5) días de notificada la

resolución, quien deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la Capital Federal o a la Cámara Federal que corresponda en el interior del país, en igual término.

CAPÍTULO X

De la prescripción

Art. 51. — Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años.

Art. 52. — Los plazos de prescripción se interrumpirán con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley.

CAPÍTULO XI

Disposiciones transitorias y complementarias

Art. 53. — Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de esta ley.

Art. 54. — No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.

Art. 55. — Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley los medios de comunicación en lo que respecta a la irrestricta libertad de prensa e información, no así cuando se tratare de conductas o prácticas económicas que importen la obtención de ventajas que afecten la libre competencia.

Art. 56. — Derógase la ley 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley continuarán tramitando de acuerdo a sus disposiciones.

Art. 57. — Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.

Art. 58. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de ciento veinte (120) días, computados a partir de su publicación.

Art. 59. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Fortunato R. Cambareri. — Jorge E. Aubia.
— Rafael M. Pascual. — Jorge A. Ocampos. — Félix A. Mothe.*

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Venimos a presentar el presente proyecto en el convencimiento de que la Argentina debe de una vez por todas tener una legislación de defensa de la competencia acorde con los adelantos en la materia.

Y decimos esto porque ya fracasaron dos intentos anteriores. El primero que avanzara hasta la media sanción que le diera esta Honorable Cámara, conforme Orden del Día N° 509, cuyos debates parlamentarios

se produjeron los días 18 y 31 de agosto de 1994, y el segundo intento frustrado fue el proyecto consensuado que se había logrado en la Comisión de Comercio, a partir de los proyectos de ley presentados por los señores diputados Flores (630-D.-96), Gabrielli y Bordín (1.026-D.-96) y Patterson y otros (3.645-D.-96), los cuales al cumplirse el plazo reglamentario han perdido vigencia.

Por tal motivo, es que presentamos el presente proyecto que recoge las grandes coincidencias obtenidas en el referido proyecto consensuado, que además ha contado con el asesoramiento de los pocos especialistas que hay en la materia, los que han conformado el Instituto de Estudios de los Mercados y la Competencia, al cual convocaremos formalmente para que brinde la necesaria asistencia técnica en este nuevo proyecto, que no dudamos se va a cristalizar en un nuevo marco legal.

Por ser coautor del proyecto Patterson y otros (3.645-D.-96), es que voy a reproducir lo que oportunamente dijéramos al presentar el mencionado proyecto.

El presente proyecto de ley expresa nuestra confianza en la superioridad de los mecanismos de mercado sobre otros sistemas alternativos de asignación de recursos y de regulación de los niveles de producción y consumo de una economía. Esa confianza no tiene un fundamento ideológico sino que, por el contrario, se inspira en los sólidos postulados de la teoría económica al respecto; la diferencia entre uno y otro enfoque estriba en que, desde la primera perspectiva, se suele ignorar que el Estado tiene una indelegable función de supervisión sobre los mercados, para asegurar que la existencia de una efectiva competencia entre empresas produzca los resultados que cabe esperar del funcionamiento de una economía de mercado competitiva.

En base a este presupuesto, el proyecto tiene por objetivo establecer los instrumentos legales que permitan prevenir y reprimir con mayor efectividad las prácticas colusivas y los abusos de posiciones dominantes que, al reducir la competencia entre las empresas que operan en un mercado, producen una pérdida neta de bienestar a la sociedad.

La primera razón para que exista esa pérdida de bienestar es que, al reducirse los niveles de competencia, los precios se distancian del costo marginal y alcanzan valores que permiten extraer rentas de los consumidores. Esta renta o excedente del consumidor, que es normalmente utilizada como el indicador relevante del bienestar, ya que mide la diferencia entre lo que éstos estarían dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan, se reduce a un mínimo en el caso del monopolio y crece a medida que aumenta la competencia entre las firmas. De este modo los consumidores son los primeros y principales perjudicados por la existencia de mercados no competitivos.

La segunda razón está ligada a la eficiencia económica en su sentido más estricto y se refiere a la capacidad de una economía de dar respuesta de un modo impersonal y seguro a los clásicos problemas de cuándo y cómo producir. Pero para obtener este ajuste entre demanda y oferta en forma eficiente se requiere, como condición, que los precios ni estén distorsionados arti-

ficialmente por acuerdos para restringir la producción, distribuir la demanda, fijar precios mínimos, cerrar el acceso al mercado a nuevos productores y otras aberraciones que en general se penalizan en todas las legislaciones avanzadas del mundo capitalista.

Cabría añadir en apoyo de la necesidad de una legislación de defensa de la competencia que, adicionalmente, la falta de rivalidad entre las firmas produce otras ineficiencias que han sido suficientemente estudiadas por la ciencia económica, como son una distribución más regresiva del ingreso nacional, el atraso tecnológico debido a la falta de incentivo para la innovación, el incremento de los costos empresarios debido a la falta de presión competitiva, y el incurrir en gastos socialmente injustificables destinados a expandir y mantener el poder monopolístico.

Estas razones parecerían haber sido aceptadas de antemano en el país, ya que la Argentina fue uno de los primeros países del mundo que adoptó una legislación antimonopolística (en 1919).

Esta legislación fue luego modificada en varias oportunidades con el propósito de aumentar y tipificar mejor las conductas sancionadas, así como para mejorar la efectividad de su aplicación. Sin embargo, como es sabido, muy poco es lo que se logró en el terreno de la aplicación de esta legislación, ya que en general fue letra muerta en los estrados judiciales.

Estos resultados se repitieron también con la Ley de Defensa de la Competencia, que buscando aumentar la efectividad de aplicación creó la Comisión para la Defensa de la Competencia bajo la dependencia de la Secretaría de Comercio Interior. La explicación principal de esta falta de efectividad ha sido que el ente regulador careció de autonomía, de los recursos humanos calificados y de la independencia política necesaria para actuar expeditivamente, ya que al ser una agencia dependiente del secretario de Comercio quedó postergada ante los otros problemas de esa cartera. Tampoco tuvo la ley 22.262 un procedimiento efectivo para que los consumidores y empresas afectadas por la existencia de situaciones de abusos de poder de mercado pudieran ejercer sus derechos.

Por esta razón cabe asignar a la creación de un tribunal especializado, jerarquizado, independiente del poder político y cuyos miembros tuvieran estabilidad frente a los cambios de gobierno, la máxima prioridad en la revisión de la legislación antimonopolística. En estas condiciones de funcionamiento, el tribunal no sólo contaría con los medios y las condiciones necesarias para actuar más ágilmente, sino que además estaría obligado ante la opinión pública a revalidar permanentemente su existencia mediante los resultados que pueda exhibir.

La segunda prioridad es establecer, sin ambigüedades que den pie a subterfugios jurídicos, los hechos condenados por la ley facilitando, asimismo, una más expedita aplicación de sanciones. Cabe decir al respecto que, por el hecho de haberse privatizado los servicios públicos y algunas otras grandes empresas productoras de bienes, la legislación en la materia ha cobrado nueva vida, ya que existen incompatibilidades potenciales que en ninguno de los proyectos existentes se ha contem-

plado suficientemente, aunque en alguno de ellos estuvieran contenidas previsiones para evitar que en los procesos de privatización se crearan situaciones monopolísticas no derivadas de la necesidad de economías de escala.

Por las razones expuestas se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.

*Fortunato R. Cambareri. — Jorge E. Aubia.
— Rafael M. Pascual. — Jorge A. Ocampos. — Félix A. Mothe.*

—A las comisiones de Comercio, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.

48

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado la construcción de un puente cubierto sobre la avenida Rivadavia que una el edificio del Palacio Legislativo con el del Anexo, para lo cual se faculta al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados a realizar los estudios correspondientes de factibilidad y costo a tal fin.

Manuel L. Martínez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Esta obra se convirtió en extrema necesidad para la funcionalidad, practicidad y economía de tiempo de los señores legisladores. Bien conocidos son los inconvenientes que se suceden a diario en la tarea legislativa y en la administrativa; como cualquier otra tarea que se deba realizar en el Palacio implica el riesgo de cruzar la avenida Rivadavia, soportar la inclemencia del tiempo, la congestión que se produce para el acceso a los ascensores y la pérdida de tiempo que significa, lo enumerado precedentemente y ventaja de la mayor seguridad que se lograría.

Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Manuel L. Martínez.

—A las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Municipales.

49

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º.—Dejar sin efecto el incremento de tarifas de peaje correspondientes a los tramos concesionados de la red vial, hasta tanto se determinen con exactitud las deudas y créditos recíprocos entre el Estado y las empresas, retrotrayendo sus valores a los vigentes al 12 de enero de 1908.